

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE CADIZ.

Miércoles 13 de Mayo.

Año de 1857.

Las leyes y las disposiciones generales del Gobierno son obligatorias para cada capital de provincia desde que se publican oficialmente en ella, y desde cuatro días después para los demás pueblos de la misma provincia. (Ley de 3 de noviembre de 1837.)

Las leyes, órdenes y anuncios que se manden publicar en los Boletines oficiales se han de remitir al Cefo político respectivo, por cuyo conducto se pasarán a los editores de los mencionados periódicos. (Real orden de 6 de abril de 1839.)

N. 112.

PARTE OFICIAL.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CADIZ.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
La Reina nuestra Sra. (q. D. g.) y su augusta Real familia continúan sin novedad en su importante salud.

Estadística.—Circular n. 153.

Habiéndome consultado el señor Alcalde del Puerto de Santa María acerca de si los trabajadores del campo, que incidentalmente se hallen en el día de la inscripción trabajando en un predio rústico, han de ser incluidos en la misma cédula del cap. 12, casero ó encargado del referido predio, ó si se les ha de repartir cédulas individuales como vecinos del pueblo en que radica el predio, toda vez que el art. 39 de la Instrucción de 14 de marzo último no resuelve esta duda en el concepto de aquella Alcaldía, he acordado decir al referido Alcalde con la fecha de hoy lo siguiente.

«La consulta que V. S. se sirve hacerme en su oficio de ayer, se encuentra comprendida en el art. 39 de la Instrucción de 14 de marzo último, pues no habiendo en ella designación especial respecto de las labores del campo, deben considerarse como obras de particulares: mas no obstante he acordado decir á V. S. para evitar después repeticiones, que los trabajadores que se encuentren en el caso de la consulta, expresen también en sus cédulas si tienen ó no familia, y si son ó no cabezas de ella, y la casa, calle y pueblo de su vecindad, sin que por eso dejen de inscribirse estas familias en sus pueblos respectivos, cuyas cédulas, en caso de ausencia del jefe de la casa, debe darla la persona que lo represente, con arreglo al párrafo 2.º, art. 2.º de la circular de 27 de abril último, publicada en el Boletín oficial núm. 104 fecha 3 del actual.

Lo que he dispuesto publicar en el Boletín oficial de esta provincia, para conocimiento é inteligencia de las Juntas municipales á quienes ocurra la misma duda.

Cádiz 12 de mayo de 1857.—Manuel Cano.

Circular.

El Excmo. Sr. ministro de Gobernación me dice con fecha 8 del actual lo siguiente:

Habiéndome dirigido S. M. reñir el día 21 del mes corriente para que se practique el empadronamiento general de la población del reino, y siendo este mismo día prefijado por la Real orden de 23 de abril último, para empezar en todos los pueblos de la monarquía el llamamiento y declaración de solda-

dos en la presente quita, la Reina (q. D. g.) deseosa de evitar los inconvenientes de que estas dos importantes operaciones empiecen en un mismo día se ha servido mandar:

1.º El llamamiento y declaración de soldados dará principio el domingo 21 de mayo actual, y no el 21 del próximo mes designado por la disposición 5.ª de la citada Real orden.

2.º Las circunstancias á que alude la regla 7.ª del art. 77 de la ley vigente de reemplazos, para el disfrute de las exenciones del servicio, se considerarán en su consecuencia precisamente con relación al referido día 21 de mayo.

3.º La entrega de los quintos en caja empezará el día 15 de junio próximo venidero, y terminará el 4 de julio siguiente, en vez de verificarse del 12 al 20 de aquel mes, plazo anteriormente designado para esta operación.

Y 4.º Queda subsistente lo previsto en dicha Real orden circular de 23 de abril último, menos en lo que se modifica por la presente.

De Real orden lo digo V. S. para su inteligencia, la de ese consejo provincial y demás efectos consiguientes.

Lo que he dispuesto publicar en el Boletín oficial de esta provincia para su inteligencia y cumplimiento.

Cádiz 12 de mayo de 1857.—Manuel Cano.

ADMINISTRACION.—NEGOCIADO 3.º

Circular núm 151.

Los Sres. Alcaldes de los pueblos anotados á continuación, no han cumplido lo mandado por el párrafo 1.º de mi circular de 14 de abril último, inserta en el Boletín oficial de 15 del mismo, (y rectificada en el número del día siguiente), respecto la remisión á este Gobierno, á correr seguido ó con uno de intermedio, de una nota de lo recaudado hasta fin de marzo anterior, por el recargo del 50 p.º sobre la contribución de consumos con destino á cubrir el déficit del presupuesto provincial de este año. Y ni uno solo ha dirigido la nota pedida también por lo que hace á lo recaudado por el mismo concepto en el expresado mes de abril. Recuerdo, pues, á todos los Sres. Alcaldes mi citada orden circular, previniéndoles que cumplan esta y puntualmente cuanto por la misma se manda, bajo apercibimiento. Sin perjuicio de participar á este gobierno, para su conocimiento y demás fines, los medios que á consecuencia de su otra circular de 30 del mismo abril, hayan escogitado los respectivos ayuntamientos para cubrir la cuota que les han sido señaladas en el último reparto hecho por la Excmo. Diputación provincial para cubrir el déficit de su presupuesto general correspondiente á este año.

Cádiz 12 de mayo de 1857.—Manuel Cano.

Arco.	Medina.
Villamartin.	Alcalá del Valle.
V. Jer.	Puerto Serrano.
Banlocaz.	Senil.
Ubrique.	Torre-Alhiquime.
Villaluenga.	

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

Subsecretaria.—Negociado 2.º

Remitido á informe del Consejo Real el expediente de autorización para procesar á don Blas Gutierrez, Alcalde de Rodilana, por haber acusado de conato de incendio á Gaspar de San José, ha consultado lo siguiente:

«El Consejo ha examinado el expediente en que el Juez de primera instancia de Medina del Campo pide autorización para procesar al Alcalde de Rodilana, don Blas Gutierrez.

Resulta, que en 21 de julio de 1856 el Capitán general de Valladolid trasladó al presidente del Consejo de guerra un oficio en que el Alcalde de Medina del Campo le daba parte, con referencia á otro oficio del Comandante del puesto de Guardia civil de aquella villa, de tener á su disposición á Gaspar de San José, quien, según dicho Comandante, intentaba incendiar la casa y era del Alcalde de Rodilana, siendo además hombre que causaba diariamente daños en las propiedades, y según voces se delicaba á los robos.

Pasó la causa al Consejo y se tomó declaración al Alcalde de Rodilana. Este dijo que á consecuencia del bando de Capitán general y circular reservada creyó conveniente, en atención á los malos antecedentes de Gaspar de San José, dar parte al Comandante de la Guardia civil para que lo prendiera, pues según la opinión de las personas sensatas y mayores contribuyentes había cometido, aunque no estaba probado, varios atentados de incendios, daños de descepo y desmocha en el campo, recientemente uno en una caballería del declarante; teniendo en cuenta que en febrero de aquel año se le había aprehendido una pistola con la cual se dijo había disparado un tiro á Gregorio Rodríguez, por lo que se le formó causa y sufrió arresto de 15 días: que los delitos que se le imputaban habían sido cometidos antes del bando del Capitán general, y que no tenía noticia de que hubiese intentado incendiar las eras de su propiedad. En apoyo de su dicho declararon cinco personas que citó.

Tomóse indagatoria al detenido, y en ella dijo: que no era cierto hubiese tratado de incendiar la casa y eras del Alcalde, y que únicamente atribuyó la imputación á una venganza del mismo, quien pocos días antes le había imputado haber herido á una pollina, lo que se

acreditó en juicio de faltas ser falso, y que acerca de su conducta podían decir las eras parrocos don Rustaquo Bayon y don Francisco Salas, y el cirujano don Pablo Velasco. Los tres dijeron que Gaspar de San José había tenido una conducta irreprochable; que no creían fuese cierto que había intentado incendiar la casa y eras del Alcalde de Rodilana, añadiendo el primero que lo achacaba á una venganza personal, pues ambas familias se había llevado siempre muy mal por pertenecer á distintos partidos políticos.

El Fiscal militar no encontró nada que acreditase la acusación contra el procesado; atribuyó el parte del Alcalde de Rodilana á una venganza, y opinó por el sobreseimiento, apercibidos al Alcalde para que en lo sucesivo no procediese con tanta ligereza.

El Auditor, á quien pasó la causa, opinó que nada procedía militarmente contra el procesado, y que se remitiera la causa al Juez del partido para que dictase las providencias que correspondiesen en justicia por los desfueros que hubiese podido cometer el Alcalde de Rodilana abusando de su autoridad.

Pasó en efecto la causa al Juzgado, y el Promotor pidió que se sacase testimonio de la sentencia que hubiese recaído en la causa seguida á Gaspar de San José por disparo de una pistola, y que se pusiese testimonio del juicio de faltas que este hubiese en su indagatoria; que el Comandante del puesto de la Guardia civil entregara el oficio que lo envió el Alcalde de Rodilana.

En el juicio de faltas celebrado por el Alcalde de Rodilana contra Jorja Hernández, madre adoptiva de Gaspar de San José, no aparece probado que este hubiese dado dos navajadas á una pollina de la propiedad de aquel, de lo cual la causa. Puesto testimonio del parte que el Alcalde envió al Comandante de la Guardia civil, aparece que en efecto el Alcalde acusaba al procesado de tener malos antecedentes, de haber querido incendiar una casa y era de su propiedad, de causar daños de consideración constantemente en el campo, de haber disparado una pistola contra un conejo suyo, de pertenecer á la raza de sicarios que habían causado las desgracias sufridas por aquella provincia. Según testimonio del Juzgado, apareció que en efecto se había seguido causa á Gaspar de San José, por el disparo de una pistola, cuya causa fue sobreseída mandando celebrar el oportuno juicio verbal en el que fué condenado á 15 días de arresto.

El Promotor manifestó que había méritos para proceder contra el Alcalde, pero que ante lo que se debía pedir autorización al Gobernador. Pidió en efecto por el Juez y fué denegada en 28 de noviembre previa audiencia del Consejo

provincial.

Considerando que al denunciar el Alcalde de Rodilana á Gaspar de San José de la manera que lo hizo, cumplió con las prescripciones de la policía preventiva en vista de los malos antecedentes que dá el téñis; y que si en algo se escedió, éste esceso de celo es muy dignable atendida la época en que acaeció el suceso, cuando la provincia de Valladolid acababa de sac el teatro de excesos de violencia y en una época en que los Alcaldes debían ser hasta rigurosos para evitar que dichos excesos se reprodujeran, y salvar la responsabilidad que sobre ellos pesaba.

El Consejo opina podria V. E. servirse consultar á S. M. se confirme la negativa dada por el Gobernador de Valladolid.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (q. D. g.) resolver de conformidad con lo consultado por el Consejo, de Real orden lo comunico á V. S. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de abril de 1857.—Nocedal.—Sr. Gobernador de la provincia de Valladolid.

—O—

Remitido á informe del Consejo Real el expediente de autorización para procesar al alcalde, varios concejales y secretario del ayuntamiento de Castro del Rio por suponerseles excesos en el ejercicio de sus atribuciones, ha consultado lo siguiente:

«El consejo ha examinado el expediente en que el juez de primera instancia de Castro del Rio pide autorización para procesar al alcalde, secretario de ayuntamiento y varios concejales del espresado pueblo.

Resulta de los antecedentes, que en virtud de la denuncia hecha al Gobernador, con motivo de los abusos cometidos en el derribo y estraccion de materiales del convento del Carmen, comisionó al secretario del Gobierno civil para que formara las primeras diligencias en averiguacion de los hechos. Varios testigos declararon en el expediente gubernativo que en efecto se habían estraido muchos materiales y maderas, las puertas de hierro, el brocal del pozo, techos y pinturas: que los hierros, según se decía, estaban en el ayuntamiento, las maderas, materiales y pinturas en casa de don Antonio Tejada, y el brocal del pozo en la de don Vicente Fuentes, secretario del ayuntamiento. Tejada dijo que había estado al frente de los trabajos del derribo por comision del alcalde.

El secretario comisionado mandó proceder al arresto del alcalde don Pedro del Rio y dos concejales, y pasó las diligencias al juzgado en 3 de junio de 1856. Amplióse la declaración de Tejada, quien manifestó haber sido encargado del derribo de una parte ruinosa del edificio y de vender los materiales que de él se sacasen; que no había dado aun cuentas de su comision; que no sabía si le había dado el alcalde era suya exclusivamente ó del ayuntamiento; que la casa de haberse adoptado aquella terminacion fué que el regidor don Antonio Miguel Garrido había llevado, por su propia autoridad, una carreta de albañiles al convento, y había principiado á derribar una celda, llevando los maderas y vendiendo otras; que habiendo llegado á noticia del ayuntamiento, el alcalde le seguía espulsó á los albañiles y encerró los materiales; que don Antonio Garrido después destruyó los pilares de la fuente vieja, dejando los sillares en el suelo; que el declarante escórra, los sillares y tres cuadros que no quiso dejar en el convento porque no lo estrajeran; que las puertas de hierro y maderas últimamente sacadas, se habían llevado las primeras á orden del alcalde á la capilla de la cárcel, las

mayores de madera al colegio de San Pedro y San Pablo, y las pequeñas al ayuntamiento; que el depositario de propios pagó á los albañiles que hicieron la demolicion.

El albañil encargado de este declaró haber recibido orden del ayuntamiento para sacar las mencionadas puertas y colocarlas en los espresados sitios.

Los albañiles que hicieron el derribo por cuenta de Garrido, declararon que en marzo de 1855 fueron buscados por aquel para que procedieran á derribar una celda y cocina del convento, así como para la limpieza y repaso de los tejados; que se estrajeron algunas vigas, hasta que habiéndose presentado el segundo alcalde don Joaquín Rodríguez, los echó á ellos y recogió las llaves; que no pagándoselos el desestejo, acudieron al ayuntamiento, y después de mucho tiempo el alcalde Rio les dió un vale para el depositario de propios, quien les echó de pagar lo que se les restaba del dastajo que ajustó Garrido.

Por auto de 2 de octubre de 1855 se mandó al ayuntamiento de Castro informar sobre el objeto para que se estrajeron del convento las puertas de hierro y de madera y el brocal del pozo, así como de la autorización que se habiessedado á don Antonio Garrido para el derribo de la celda y cocina. Informaron en efecto que el alcalde del Rio había ordenado al perito concejal Juan Pinillos levantar las puertas de hierro y de madera y brocal del pozo para evitar los deterioros consiguientes al estado de ruina en que el convento se hallaba, y colocarlo, previas las autorizaciones competentes que en su día se pidiere, la puerta de hierro en la de los portales de la casa capitular, el brocal del pozo para hacer cuatro grandes rejas que se colocarían en los restantes arcos y las puertas de madera una en el colegio de San Pedro y San Pablo donde se hallaban establecidas las escuelas, y otras en la sala capitular; que dichos efectos fueron atrecaados y colocados en sus respectivos puntos y depositados otros; que no aparecia haberse concedido autorización al regidor Garrido para el derribo de la celda baja y cocina del convento y venta de sus materiales; que en sesion de 26 de marzo de 1855 aparecia un acuerdo autorizando á la comision especial de obras para que propusiera lo que creyera conveniente para la conservacion del convento, enajenándose para atender á este objeto los materiales que saliesen, dando cuenta al ayuntamiento por ser de su propiedad el mencionado convento; que en la sesion de 22 de mayo del mismo año se dió cuenta de un memorial de los albañiles Alba, Millan y Garrido, pidiendo se les cumpliera el contrato que tenían hecho con el regidor Garrido, y al acordarse lo conveniente sobre esto memorial, el segundo alcalde don Joaquín Rodríguez, propuso se suspendiera la resolucion hasta que informara la comision que para el efecto había sido nombrada.

En este estado, el alcalde del Rio puso en conocimiento del juez estar formándose sumario en averiguacion de quien había destruido el pilar de la fuente vieja. De las diligencias practicadas apareció que el regidor don Antonio Garrido había dado orden para la destrucción del pilar, pagando los jornales á los albañiles depositario de ayuntamiento. Por mandato del juez certificó el secretario de ayuntamiento que no constaba haberse satisfecho á los albañiles que demolieron el pilar de la fuente sus jornales del fondo municipal. Púsose también testimonio de que el brocal del pozo obraba en poder del secretario de ayuntamiento don Vicente de Fuentes, cuyo brocal quedó retenido á disposicion del secretario del Gobierno civil al formar el expediente informativo de que arranca esta causa.

El promotor propuso, y el juez acordó que resultaba culpabilidad de parte del alcalde don Pedro del Rio y secretario de ayuntamiento Fuentes, por la estraccion de las puertas y brocal del pozo del convento; contra don Antonio Garrido por el derribo de la celda y cocina de él mismo, disponiendo de sus maderas y materiales y contra el ayuntamiento por la complicidad que en este hecho pueda tener; contra el mismo Garrido por la destrucción del pilar de la fuente vieja y don Antonio Martín y Morales, regidor depositario de propios, por la parte que tuvieron en este hecho. En cuya virtud pidió al Gobernador autorizacion para proceder.

El Gobernador dió audiencia á los interesados, de los que únicamente se presentaron el alcalde Rio y secretario Fuentes. El primero protestó acerca de su culpabilidad en el asunto y pidió se conoediera al juez la autorizacion que solicitaba, pues era el único medio que tenía para sincerarse de las calumnias de que había sido objeto.

El segundo manifestó que había sido completamente extraño al derribo del convento; que adquirido este por el ayuntamiento á censo, y siendo de su propiedad, el alcalde pensó en utilizar las puertas en el mismo ayuntamiento y otros edificios públicos, y aprovechar el hierro del brocal del pozo para hacer unas rejas grandes destinadas también á armonizar el ayuntamiento; que habiéndose depositado el brocal en la secretaria del ayuntamiento, y pidiéndose una barra del mismo, el informante creyó conveniente llevarle á su casa con conocimiento del alcalde y concejales, con el objeto de que estuviera mas seguro; que nada era responsable y que en su consecuencia se denegase la autorizacion contra él pedido.

El Gobernador oido el Consejo provincial manifestó al juez que no era necesaria la autorizacion para procesar á don Antonio Miguel Garrido y don Antonio Morales, pues aunque eran regidores no obraron autorizados por el ayuntamiento y en tal concepto como agentes de la administracion; que le autorizaba para procesar al alcalde por su omision en formar las diligencias para castigar el delito cometido por los anteriores; y negó absolutamente la autorizacion para procesar al secretario de ayuntamiento, y en calidad de por ahora, también le denegó respecto al alcalde del Rio, por la estraccion de puertas y brocal del pozo, hasta tanto que la administracion examinase esta cuestion previa.

Visto el art. 27 de la ley de 3 de febrero de 1823, según el cual estaba á cargo de los ayuntamientos la administracion é inversion de los caudales de propios y arbitrios.

Considerando: 1.º Que no puede ser aplicable á los regidores Garrido y Martín la garantía que tienen los funcionarios administrativos de las provincias de no poder ser encausados sin permiso de los Gobernadores por hechos relativos á sus funciones administrativas, toda vez que el derribar la celda y cocina del convento y pilar de la fuente no procedieron con autorizacion del ayuntamiento ó del alcalde, sino por autoridad propia, y en tal concepto deben ser reputados como particulares.

2.º Que si el alcalde Rio no formó oportunamente la sumaria en averiguacion de estos hechos, no incumbe su conocimiento á la administracion civil sino á la de justicia, á cuyo cargo está juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado.

3.º Que no resulta responsabilidad alguna contra el secretario de ayuntamiento Fuentes, pues si tenía en su casa el brocal del pozo fué porque se le entregó en depósito el alcalde; sin que hubiese tenido parte directa ni indirecta en el derribo del convento.

4.º Que la responsabilidad que el alcalde contrajo al trasladar las puertas y brocal del pozo del convento del Carmen para destinarlos á la casa de ayuntamiento y escuelas de niños, es puramente administrativo y puede y debe ser corregido gubernativamente puesto que el convento pertenecía á los propios del pueblo, y destinó los objetos concuñados para servicio y utilidad de establecimientos pertenecientes á los mismos, por mas que lo verificase sin la autorizacion correspondiente.

El consejo opina podria V. E. servirse consultar á S. M. se declarara innecesaria la autorizacion para procesar á los regidores Garrido y Martínez; también innecesaria para proceder contra el alcalde Rio por la omision en formar sumaria en averiguacion de los culpables en los derribos del convento, y denegada en lo relativo al secretario de ayuntamiento y alcalde por la traslacion de las puertas y brocal del pozo del convento.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (q. D. g.) resolver de conformidad con lo consultado por el consejo, de Real orden lo comunico á V. S. para su inteligencia y efectos correspondientes: Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de abril de 1857.—Nocedal.—Sr. Gobernador de la provincia de Córdoba.

—O—

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

Subsecretaria.—Negociado 2.º

La Reina (q. D. g.) se ha dignado expedir el Real decreto siguiente:

«En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador de la provincia de Leon y el juez de primera instancia de la capital, de los cuales resulta:

Que los dos pedáneos y considerable número de vecinos de cuadros interpusieron en 15 de setiembre del año próximo pasado, ante el referido juez, tres interdictos; uno contra don Javier Gutiérrez y don Joaquín García; otro contra Cipriano García, y otro contra Vicente García, pidiendo amparo en la posesion de ciertas servidumbres de paso para personas, caballerías y carros por heredades de la pertenencia de estos últimos, á consecuencia de verse privado el comun de vecinos de aquellas servidumbres, por haber sido cerrados por sus dueños las indicadas heredades en marzo del mismo año:

Que admitidos por el juez los interdictos, y enterado el Gobernador de la provincia, mediaron contestaciones entre ambas autoridades sobre este negocio, siendo entretanto reintegrado judicialmente en la posesion el consejo y vecinos de cuadros, en cuyo estado recibió el juez formal requerimiento de inhibicion del Gobernador, de que resultó el presente conflicto sostenido por parte de la autoridad judicial, en el concepto de que, además de ser el asunto propio de la jurisdiccion ordinaria, no había ya lugar á la competencia en el estado en que se encontraba, con arreglo al párrafo tercero, art. 3.º de mi Real decreto de 4 de junio de 1847:

Vista la disposicion 5.ª de mi Real orden de 17 de mayo de 1838, según la cual deben los alcaldes y ayuntamientos impedir el cerramiento, ocupacion ó otro embaraado de las servidumbres públicas destinadas al uso de hombres y ganados, que en ningún caso pueden ser obstruidas:

Visto el párrafo primero, art. 8.º, y el art. 9.º de la ley de 2 de abril de 1835, que determinan que los consejos provinciales oigan y fallen las cuestiones contenciosas relativas al uso y distribucion de los bienes ó aprovechamientos provinciales ó municipales, y á todo lo contencioso de los diferentes ramos de la administracion civil, para lo

cual no establezcan las leyes juzgado especiales.

Viso el párrafo tercero, art. 3.º de Real decreto de 4 de Junio de 1847, que prohibe á los jefes políticos (hoy gobernadores) suscitar contiendas de competencia en los pleitos fenecidos por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada:

Considerando: 1.º Que según la ley y Real órden citados, pertenece á la Autoridad administrativa mantener el estado de cosas existente en materia de servidumbres públicas, y por lo tanto el primer pedáneo de Cuadros debió por sí mismo ó recurriendo al Alcalde del Ayuntamiento, tomar la providencia oportuna para poner expedidas las servidumbres de que se trata, sin acudir al Juzgado ordinario, como lo ha hecho, porque en estas materias no pueden prorrogarse las atribuciones y la jurisdicción que corresponde á la Administración de la Haca gubernativa y en la contenciosa.

2.º Que no obsta el estado en que se encontraba el negocio en el Juzgado de primera instancia al suscitarse en forma la presente contienda, para que esta sea procedente, toda vez que, como con repetición se ha dicho en casos análogos, el juicio sumarisimo de posesion no puede producir la ejecutoria de que hablan el párrafo y artículo últimamente citados de mi Real decreto de 4 de Junio de 1847.

Oído el Consejo Real, vengo en decidir esta competencia á favor de la Administración.

Dado en Palacio á 29 de abril de 1837.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernacion, Cándido Nocedal.

De Real órden lo traslado á V. S., con devolución del expediente y autos á que esta competencia se refiere, para su inteligencia y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de abril de 1837.—Nocedal.—Sr. Gobernador de la provincia de Léon.

-0-

MINISTERIO DE HACIENDA.

Ilmo. Sr.: He dado cuenta á la Reyna (Q. D. G.) del expediente instruido con motivo de haber manifestado esa direccion general la conveniencia de que se armonizaran las prescripciones del art. 32 de la instrucción de Aduanas, haciéndose así mas efectivo su cumplimiento.

En su vista, y con presencia de los informes emitidos por la seccion de Hacienda del Consejo Real, la suprimida Junta consultiva de Aranceles y V. I., S. M. ha tenido á bien mandar se reforme el citado art. 32 en los términos siguientes:

«Si cotejado el manifiesto con el re-

gistro remitido por el Cónsul resultare conformidad, se expresará así indicando la fecha, y poniendo media firma el Contador.

Si apareciera diferencia, el Administrador exigirá al Capitan ó patron, y en su defecto al dueño de la embarcacion ó á su consignatario legalmente reconocido, el importe del derecho de las mercancías contenidas en cada cabo que hallándose á bordo, resulte de mas en el manifiesto, y un recargo igual al importe de estos derechos, distribuido entre la Hacienda y los empleados descubridores; pero si la diferencia consistiere en bultos manifestados de ménos, y que no se hallen á bordo, se exigirán al Capitan y en su defecto al dueño ó consignatarios, los derechos de Arancel correspondientes á las mercancías expresadas en el registro consular, y un recargo del duplo de estos derechos, distribuido entre la Hacienda y los empleados descubridores.

Esta disposición se aplicará siempre que las mercancías que contengan ó deban contener los cabos, sean de lícito comercio; pero exceptuándose los equipajes cuando no haya lugar á satisfacer derechos y las mercancías que correspondan á la tripulacion del buque, y cuyo valor no exceda de 1,000 reales por individuo.

Quando en los cargamentos de carbon de piedra ó de otras mercancías á granel hubiere conformidad entre la nota del cargador, la declaración del consignatario y el resultado de reconocimiento, pero se encontraren diferencias de más ó de ménos en el manifiesto, se exigirá al Capitan una multa equivalente á la diferencia entre los derechos de la mercancía expresada en el manifiesto y los correspondientes á la designada en el registro consular.

Si las mercancías en que resulten diferencias son prohibidas, se impondrán las mismas penas establecidas para las diferencias entre lo que espreso el manifiesto y lo que aparezca del reconocimiento.

De Real órden lo digo á V. I. para su inteligencia y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de abril de 1837.—Barzanallana.—Sr. Director general de Aduanas y Aranceles.

N. 615.

Los acreedores al concurso de D. Juan Antonio Sopranis, y casas calle de este nombre núm. A, y de la Merced núm. 2, deberán presentar para la debida clasificación los documentos justificativos de sus créditos entregándolos al procurador don Andrés Terry, representante del síndico, en el término de treinta dias, bajo apercibimiento de quedar excluidos

los que así no lo verifiquen según lo ha decretado por ante mí el señor juez interino de primera instancia del distrito de San Antonio, en los autos de aquella dependencia.

Cádiz 9 de mayo de 1837.—Jose Maria Ruiz de Quintana, escribano público.

N. 616.

D. Pedro Pilon y Tobalina, caballero cruz y placa de la órden militar de San Hermenegildo, brigadier comandante de marina de la provincia y tercio naval de esta plaza etc.

Por el presente cito y emplazo á los que se crean con derecho á reclamar la propiedad de una lancha que con cargamento de trigo fué aprehendida la noche del 23 al 24 de marzo último, por el cabo celador Juan Marchans, en las aguas de esta bahía, donde la abandonó su conductor arrojándose al mar; á fin de que en el término de treinta dias, contados desde el siguiente al de la publicacion de este edicto en el Boletín oficial de la provincia, comparezcan en este juzgado á deducir sus acciones en la sumaria instruida sobre el particular, mediante á que por providencia dictada en ella ante

el infrascrito escribano, así lo he mandado, y en el concepto de que pasado dicho término sin haberlo hecho, se proveerá lo que baya lugar.

Cádiz 23 de abril de 1837.—Pedro Pilon.—Licenciado, Ramon Maria Pardillo.

N. 617.

EDICTO.—D. Manuel Lopez de Sagredo, juez de primera instancia de este partido.

Hago saber: Que por consecuencia de los autos de concurso necesario de Antonio Real, se saca á pública subasta para su venta, una suerte de viña, tierras de matas, arbolado y cañaberal de 73½ aranzadas, 80 estadales, en este término, pago del Almorjar alto, apreciada en 14,670 rs. 50 cs., cuyo remate tendrá efecto el día 8 del próximo mes de junio á las doce de su mañana en la casa despacho del Juzgado. Y para conocimiento de los licitadores se fija el presente é inserta en el Boletín oficial y periódicos de la capital de la provincia.

Puerto de Santa Maria 5 de mayo de 1837.—M. Lopez de Sagredo.—Por mandado de su señoría.—Don Juan Patou.

Compañía Trasatlántica de Génova.

LINEA DEL BRASIL.

Salidas de BARCELONA el 21 y de CADIZ el 28 de cada mes.

Los cuatro magníficos vapores sardos á hélice nuevos, construidos espresamente en los astilleros de Londres,

VICTORIO EMANUEL, de 1800 tonel.	CONDE CAVOUR . . . de 1800 tonel.
GENOVA 2000	TORINO 2000

Salen de Génova para Rio Janeiro el 20 y de Rio Janeiro el 1.º de cada mes, á la ida en Marsella, Barcelona, Cádiz, Santa Cruz de Tenerife, Fernambuco y Bahía. tocando á la vuelta en Bahía, Fernambuco, San Vicente, Madera, Lisboa y Marsella.

Se combinan en Rio Janeiro con otro vapor de la compañía, EL ITALIA, destinado exclusivamente al servicio del Rio de la Plata, el cual sale de Rio Janeiro para Montevideo y Buenos Aires el 25 de cada mes. de Buenos Aires para Montevideo y Rio Janeiro el 15

EL GENOVA	saldrá de Barcelona el 21 y de Cádiz el 28 abril.
CONDE CAVOUR	21 28 mayo.
TORINO	21 28 junio.
VICTORIO EMANUEL	21 28 julio.

Acúdase en Madrid á los Sres. Girona y Compañía.—En Barcelona, viuda de J. Milans é hijo.—En Cádiz don A. Jordan Oneto y Compañía. 156-10 y 25